

CONTENIDO

PODER EJECUTIVO

Decretos.....	2
Acuerdos.....	3

DOCUMENTOS VARIOS..... 8

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Edictos	47
Avisos.....	47

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA..... 47

REGLAMENTOS

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS..... 73

RÉGIMEN MUNICIPAL

AVISOS..... 77

NOTIFICACIONES..... 85

FE DE ERRATAS..... 88

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 37924-JP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones y en los artículos 27 y siguientes de su Reglamento.

Considerando

I.—Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de Utilidad Pública a las Asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una necesidad social.

II.—Que la Asociación para Protección de los Recursos Naturales Plantar, cédula de persona jurídica 3-002-247433 se inscribió en el Registro de Asociaciones del Registro Público desde el día veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve, bajo el expediente 11304, tomo 461, asiento 15709. Asimismo, dicha entidad fue declarada de Utilidad Pública mediante el Decreto Ejecutivo número 32810-J del veintidós de octubre de dos mil cinco.

III.—Que la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales Plantar, no ha presentado los informes de gestión anual desde el año dos mil seis a la actualidad. Asimismo, no ha cumplido con los requisitos para la solicitud de la revocatoria de la Declaratoria de Utilidad Pública. **Por tanto,**

DECRETAN:

Artículo 1°—Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo número 32810-J del veintidós de octubre de dos mil cinco, mediante el cual se declaró de Utilidad Pública para los intereses del Estado a la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales Plantar, cédula de persona jurídica 3-002-247433.

Artículo 2°—Una vez publicado este Decreto los interesados deberán protocolizar y presentar el respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional para su respectiva inscripción.

Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintitres días del mes de agosto del dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vilchez.—1 vez.—O. C. 18950.—Solicitud N° 119-780-158.—(D-37924-IN2013080690).

N° 38045-JP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

En uso de las facultades que le confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140, y 146 de la Constitución Política; artículos 25.1, 27.1, 28 acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 y sus reformas; el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz, N° 6739 del 28 de abril de 1982 y sus reformas; artículos 1°, 13 y 14 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, N° 34582 del 4 de junio del 2008 y Decreto Ejecutivo N° 37906-MP-MCM de 25 de setiembre del 2013.

Considerando:

I.—La igualdad de género en el ámbito laboral constituye una cuestión de derechos humanos, de justicia social y un requisito para el desarrollo económico de cualquier sociedad.

Es un tema de derechos humanos en virtud de que mientras exista la discriminación por motivos de género (así como de raza, etnia, discapacidad, nacionalidad, edad, estado civil, orientación sexual, entre otros) no puede haber respeto efectivo a los derechos humanos ni una verdadera democracia.

Es un asunto de justicia social porque la reposición de las condiciones de acceso de la mujer al empleo y a la formación, sus condiciones de trabajo y protección social son factores fundamentales para la eliminación de la pobreza y el aumento de los grados de justicia social.

Es un requisito para el desarrollo económico y social, ya que, la habilitación y plena utilización de las capacidades productivas de las mujeres y de su participación en todos los ámbitos de la vida es una condición para el éxito de una estrategia de desarrollo sistemática, equilibrada y sustentable.

II.—En la Tercera Conferencia Mundial que se celebró en Nairobi en 1985, la Organización de las Naciones Unidas reveló a los Estados Miembros que solo un cierto número de mujeres se beneficiaba de las mejoras promovidas por ese organismo internacional y se les pidió a los participantes seguir acciones tendientes a asegurar el logro de la paz, el desarrollo y la igualdad. La conferencia reconoció además la necesidad de que la mujer participe en charlas y debates en todos los campos y no solo en cuanto a la igualdad de género.

III.—Es así como la igualdad de género ha sido entendida y promovida por los estados miembros de las Naciones Unidas y se han comprometido mediante la adopción y ratificación de instrumentos

Junta Administrativa

Jorge Luis Vargas Espinoza
DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NACIONAL
DIRECTOR EJECUTIVO JUNTA ADMINISTRATIVA

Lic. Isaías Castro Vargas
REPRESENTANTE MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

Lic. Freddy Montero Mora
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA



internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Costa Rica mediante Ley N° 6969 del 2 de octubre de 1984; la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem Do Para celebrada el 9 de junio de 1994”; los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 1, 14, 29, 45, 87, 89, 98, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 118, 122, 131, 138, 141, 156, 161 y resoluciones de UTI y otros, para citar solo algunos de los asumidos por el Estado costarricense.

IV.—Que en la Cuarta Conferencia Mundial Sobre las Mujeres, efectuada en setiembre de 1995 en Beijing, se acordó, entre otros asuntos, promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad, reconociendo las voces de las mujeres del mundo entero y aceptando que, aunque la situación de la mujer ha experimentado avances en algunos aspectos importantes en el último decenio, los progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes, que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos.

V.—Que es interés prioritario del Gobierno el fortalecimiento de la intervención institucional dirigida a la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva integral, mediante el desarrollo de capacidades del Estado y de la sociedad costarricense, para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de su ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural; así como el desarrollo de políticas públicas tendientes a asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, en todos los aspectos del quehacer humano.

VI.—Que la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer N° 7142 del 8 de marzo de 1990, establece como deber del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para evitar la discriminación en cualquier campo de la vida social; así como crear y desarrollar programas y servicios dirigidos a facilitar la participación plena de las mujeres, en igualdad de condiciones.

VII.—Que dentro de los fines primordiales del Instituto Nacional de la Mujer, creado por Ley N° 7801 del 30 de abril de 1998, es formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales, así como el promover la creación de oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer, además, garantizar y coordinar su funcionamiento.

VIII.—Que los compromisos de carácter internacional contraídos por el Estado costarricense, también se han visto reflejados en normas de carácter nacional y cuya implementación, debe impactar no solo en la justicia social costarricense y en su desarrollo económico y social, sino también en la eficacia y eficiencia de la gestión de las instituciones públicas y, en particular, del Ministerio de Justicia y Paz.

IX.—Que la Presidenta de la República, el Ministro de la Presidencia y la Ministra de la Condición de la Mujer mediante el Decreto Ejecutivo N° 37906-MP-MCM, ordenaron crear o fortalecer las unidades para la igualdad de género en las instituciones del sector público. **Por tanto,**

DECRETAN:

Artículo 1°—Créase la Unidad para la Igualdad de Género del Ministerio de Justicia y Paz, cuyos objetivos serán: promover la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género en el quehacer del Ministerio de Justicia y Paz y orientar, fortalecer y monitorear las acciones tendientes a la ejecución de la política de equidad e igualdad de género, para lo cual contará con los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para su implementación y operación.

Artículo 2°—Dicha Unidad estará ubicada en el Despacho Ministerial y dependerá jerárquicamente de la Ministra (o) de Justicia y Paz.

Artículo 3°—Las funciones de la Unidad para la Igualdad de Género del Ministerio de Justicia y Paz, son las que se establecen en el artículo 4° del Decreto Ejecutivo N° 37906-MP-MCM, así como todas aquellas que en el futuro lleguen a crearse.

Artículo 4°—Es también competencia de la persona responsable de la Unidad para la Igualdad de Género del Ministerio de Justicia y Paz coordinar y participar en la red de unidades para la igualdad de género convocadas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Artículo 5°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, a los once días del mes de noviembre del dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vilchez.—1 vez.—O. C. N° 19362.—Solicitud N° 119780-179.—C-120430.—(D38045-IN2013081612).

N° 38058-C

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 89 y 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política y 25.1 de la Ley General de la Administración Pública, y en la Ley N° 8560, del 16 de noviembre del 2006, publicada en *La Gaceta* N° 237 del 11 de diciembre del 2006 (Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial).

Considerando:

I.—Que la tradición del Boyeo y la Carreta en Costa Rica, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, constituye al día de hoy la única manifestación cultural con dicha categoría que ostenta el país.

II.—Que hoy en día los desfiles de boyeros, constituyen una de las más importantes maneras en que se expresa y reafirma públicamente la relevancia que esta tradición ha tenido en la construcción de la identidad cultural costarricense. **Por tanto,**

DECRETAN:

Artículo 1°—Declarar de Interés Público, la tradición del Boyeo y la Carreta en Costa Rica.

Artículo 2°—Las instituciones del Sector Público y del Sector Privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos o donaciones, recursos logísticos, humanos y cualquier otra clase de colaboración, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la conservación y revitalización de la tradición cultural del Boyeo y la Carreta Costarricense.

Artículo 3°—Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 37220-C del 22 de junio del 2012.

Artículo 4°—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecisiete días del mes de setiembre del dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón López.—1 vez.—O. C. N° 18079.—Solicitud N° 41296.—C-37130.—(D38058-IN2013081314).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 838-P

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en las atribuciones y facultades constitucionales y legales señaladas en el artículo 139 inciso 1) de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, número 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.

Considerando

1°—Que el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C475-2006 del 28 de noviembre del 2006 dispone en lo conducente que “[...] a no dudarlo, tanto los ministros como